

## Asociación de Internet MX advierte sobre graves efectos nocivos del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación:

# Amenaza la ciberseguridad, atenta contra la privacidad y vulnera derechos y garantías, tanto de empresas como de ciudadanos

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2025.— La Asociación de Internet MX, organización representante de la industria tecnológica con 25 años de historia y trabajo ininterrumpido impulsando el desarrollo del ecosistema digital del país, rechaza rotundamente la aprobación "fast-track" del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026.

Advierte que el país correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas.

La aprobación del Artículo 30-B en la Cámara de Diputados se tomó pese a numerosas advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron escuchadas plenamente en esta parte del proceso legislativo.

En su redacción actual, el Artículo 30-B busca facultar al SAT para acceder, en tiempo real y de manera permanente, a bases de datos de las plataformas digitales que operan en México. Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales claros.

No existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida tan intrusiva. Por ello, la Asociación de Internet MX hace pública su postura frente a esta normativa:

- Pone en riesgo la privacidad: El acceso irrestricto y permanente a sistemas digitales de alto tráfico con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pone en riesgo los datos personales de millones de usuarios, pues, aunque se pretende acotar a información relacionada con lo fiscal, potencialmente el SAT adquiere una "llave maestra" para acceder sin control judicial a información sensible. Es fundamental acotar el acceso a los datos que solo sean pertinentes a cuestiones de interés de la autoridad fiscal.
- Las sanciones son desproporcionadas y alarmantes: Las sanciones por incumplimiento pueden ser drásticas y directas y pueden significar la "muerte digital" temporal o permanente de plataformas digitales. Si el SAT, IMSS o INFONAVIT pueden ordenar el bloqueo del acceso al servicio digital, esto significa que la plataforma sería inaccesible para todos los usuarios en territorio nacional mientras dure el incumplimiento. Esta sanción implicaría pérdidas económicas enormes y afectación a millones de usuarios, sería equiparable a una clausura operativa vía Internet.
- Violación de derechos humanos: En su forma actual, el artículo contraviene el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. El Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección contra molestia ilegal, disponiendo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. También aborda la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la protección de datos personales.
- Implica un fuerte daño a la economía digital: Potencialmente, abre la puerta para la sobreexposición de secretos industriales y castiga a las MiPyMEs que hoy dependen del internet para sobrevivir. Además, se desincentiva el uso de la economía digital, lo que se traduce en que las empresas dejarán de usar el ecosistema digital por la vigilancia y las medidas desproporcionadas impuestas, lo que se traduce en un retorno a los negocios físicos con menos regulación fiscal y por ende un obstáculo para el cumplimiento de las metas del Plan México en el ecosistema digital.
- Incrementa enormemente los riesgos de ciberseguridad: si se exige emparejar en tiempo real sistemas gubernamentales con sistemas de alto tráfico en la nube, los delincuentes cibernéticos podrían interceptar esa comunicación continua si las conexiones no están debidamente resguardadas, o infiltrarse en la plataforma sabiendo que ahora hay una "puerta trasera" (el acceso del SAT, IMSS o INFONAVIT). La historia muestra que incluso agencias gubernamentales potentes pueden ser hackeadas

(como ya ocurrió precisamente con la filtración masiva de credenciales del SAT en 2024 o la actual filtración del IMSS.

- Debilita la confianza en las instituciones: es de importancia que los legisladores encargados de redactar la versión de este artículo reflexionen sobre la importancia de salvaguardar la privacidad de la ciudadanía y limitar los riesgos de exponer a millones de usuarios a la intromisión del Estado y/o del crimen organizado en su vida digital.
- Implica riesgos para el Estado mexicano: Experiencias recientes en el mundo muestran que imponer medidas que buscan centralizar el poder digital del Estado —con el objetivo de disponer de una "llave maestra" para acceder a información privada bajo el pretexto de eficiencia administrativa o control fiscal— suele ser contraproducente. Este tipo de políticas pueden conducir al país hacia la tiranía, la represión ciudadana y el surgimiento de crisis económicas, sociales y políticas. Cuando los ciudadanos perciben que sus espacios de libertad se reducen, el descontento puede escalar rápidamente, generando crisis de legitimidad y de gobernabilidad.

No obstante que la Comisión de Hacienda y Crédito Público hizo modificaciones al texto propuesto en la iniciativa original, consideramos que éstas no son suficientes para remediar los daños y riesgos descritos por la Asociación de Internet MX y numerosas organizaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio, académicos y activistas digitales.

Para mayor claridad y a manera de ejemplo, el texto aprobado significa que el SAT puede andar por las calles (Internet) y pedirle a cada ciudadano que le abra la puerta de su casa y lo deje entrar para que revise su casa, haciéndolo sólo para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales ¿Cómo sabría el SAT que información revisar? Primero voltea la casa, revisa todo y determina qué le sirve, esto sin una orden judicial y sin una causa probable. ¿No es esto autoritario?

Por ello y como representantes de la industria digital, hacemos un urgente y enérgico llamado a los Senadores y Senadoras de la República para rectificar esta medida antes de que México sea percibido globalmente como un país que legaliza la vigilancia masiva. Aprobar el Artículo 30-B en sus términos representaría un retroceso democrático, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad social, la innovación y la economía digital. Tendría un efecto también nocivo para la recaudación, con lo que tampoco se cumpliría la meta del gobierno para allegarse más recursos.

Reconocemos la legítima preocupación por combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Sin embargo, creemos firmemente que esto debe lograrse sin sacrificar derechos fundamentales: sí a la recaudación justa, no a la vigilancia indiscriminada.

La Asociación de Internet MX nuevamente pone a disposición su experiencia técnica, jurídica y de análisis para colaborar de manera constructiva con el Gobierno de México. Nuestro objetivo es diseñar un marco fiscal digital que cumpla con su función recaudatoria y, al mismo tiempo, fomente la innovación, la inclusión y el desarrollo económico.

Juntos podemos lograr una fiscalización efectiva sin vulnerar derechos ni generar riesgos operativos, con humildad y respeto presentamos la siguiente propuesta de ajustes:

- Eliminar la obligación de acceso en tiempo real, sustituyéndola por auditorías selectivas con orden judicial debidamente fundada y motivada.
- Privilegiar modelos de actualización periódica (por ejemplo, cada 48 o 72 horas).
- Limitar claramente el alcance de los datos a información que en verdad sea fiscalmente relevante para la autoridad fiscal y sin arriesgar la seguridad y privacidad de datos personales sensibles.
- Garantizar que la redacción final del artículo cuente con equivalencia funcional coherente con el Derecho Positivo Mexicano.
- Implementar candados para proteger expresamente los secretos industriales y la información que representa factores de competitividad para las empresas.
- Establecer mecanismos seguros de acceso, como portales con roles restringidos, autenticación multifactor y registros de auditoría.
- Aplicar sanciones proporcionales y escalonadas, evitando el bloqueo inmediato del servicio digital.
- Iniciar con una fase piloto para validar el modelo antes de su aplicación general.
- Incluir regímenes simplificados y proporcionales para las MiPyMEs.
- Mantener el principio de responsabilidad limitada de los intermediarios, en línea con el T-MEC y estándares internacionales.

Estamos a tiempo: la privacidad de las empresas y de las personas no son privilegios, son derechos.

Abramos juntos la puerta para mejorar la recaudación, pero sin vulnerar derechos fundamentales. No necesitamos reinventar la fiscalización digital. Aprendamos de experiencias previas y construyamos un artículo 30-B más inteligente, seguro y viable.

México aún tiene la oportunidad de demostrar que la digitalización del Estado puede ser compatible con la libertad, la innovación y el respeto a los derechos humanos.

Para más información sobre las actividades de la Asociación de Internet MX visite: <a href="https://www.asociaciondeinternet.mx/">https://www.asociaciondeinternet.mx/</a>

## Acerca de la Asociación de Internet MX (AIMX)

Es una asociación civil, sin fines de lucro, que desde 1999 representa a las empresas más relevantes de la industria de internet para orientar sus intereses hacia el desarrollo libre, responsable y seguro del mismo, generando así un impacto positivo en la sociedad. Actualmente, la asociación cuenta con más de 200 afiliados, entre los cuales se encuentran tanto MiPyMES como corporativas transnacionales de diversas actividades en línea.

## ###

Se emite el presente posicionamiento con copia a todos los integrantes del Senado de la República, a quienes se les envía a través de correo electrónico y redes sociales:

### CC:

Aguilar Castillo Heriberto Marcelo Álvarez Lima José Antonio Cruz

Anaya Cortés Ricardo Anaya Gutiérrez Alberto Anaya Mota Claudia Edith

Angulo Briceño Pablo Guillermo

Añorve Baños Manuel

Arias Trevilla Alejandra Berenice Ascencio Ortega Reyna Celeste Ávalos Zempoalteca Anabell

Ayala Robles Armando

Bañuelos De La Torre Geovanna Barrales Magdaleno Alejandra Barreda Pavón Francisco Daniel Bolaños Azocar Raymundo Bonilla Herrera Raquel Bugarín Jasmine María Camarillo Medina Néstor Camino Fariat Verónica Noemí

Campuzano González Gina Gerardina

Cantón Zetina Óscar

Castañeda Hoeflich Clemente Castillo Juárez Laura Itzel Castrejón Trujillo Karen Castro Castro Imelda Cepeda Salas Alfonso Chávez Treviño Andrea

Chavira De La Rosa María Guadalupe

Chíguil Figueroa Francisco Colosio Riojas Luis Donaldo Corona Nakamura María del Rocío

Corral Jurado Javier Cortés García Luisa Cortés Mendoza Marko Cruz Castellanos José Manuel

Davis Castro Homero De León Villard Sasil

Díaz Delgado Blanca Judith Díaz Marmolejo María de Jesús

Díaz Robles Verónica Dorantes Lámbarri Agustín Esquer Verdugo Alejandro Esquivel Torres Laura Estrada Mauro Laura

Falcón Venegas Sandra Luz Fernández González Waldo Fernández Noroña Gerardo García Medina Amalia Dolores

García Yáñez Ángel Gómez Leal José Ramón

González Hernández Alma Anahí

González Márquez Michel González Silva Ruth González Yáñez Alejandro

Guadiana Mandujano Cecilia Guadalupe

Guerra Mena Juanita
Gutiérrez Escalante Mariela
Harp Iturribarría Susana
Hernández Aceves Ana Karen
Hernández Villafuerte Gilberto
Herrera Dagdug José Sabino
Huerta Ladrón de Guevara Manuel

Inzunza Cázarez Enrique Jaimes Archundia Erik Iván Jarero Velázquez Miguel Pavel Kantún Can María Martina Loera de la Rosa Juan Carlos

Lomelí Bolaños Carlos

López Castro Cynthia Iliana López Hernández Edith

López Hernández Adán Augusto

Magaña Fonseca Virginia Márquez Márquez Miguel

Martín del Campo Martín del Campo Juan

Antonio

Martínez Simón Mayuli Latifa Melgar Bravo Luis Armando Mendoza Amezcua Virgilio Mercado Salgado Víctor

Micher Camarena Martha Lucía

Mier Velazco Ignacio Mojica Morga Beatriz Monreal Ávila Saúl Morales Toledo Antonino

Moreno Cárdenas Alejandro

Morón Orozco Raúl Murat Hinojosa Alejandro

Murguía Gutiérrez María Guadalupe Ochoa Fernández Cuauhtémoc

Olvera Bautista Simey

Ortiz Domínguez Maki Esther

Ostoa Ortega Aníbal

Polevnsky Gurwitz Yeidckol Ramírez Acuña Francisco Javier Ramírez Marín Jorge Carlos Ramírez Padilla Julieta Reyes Carmona Emmanuel Reyes Hernández Ivideliza Riquelme Solís Miguel Ángel Rivera Rivera Ana Lilia

Robles Gutiérrez Beatriz Silvia Rodríguez Hernández Verónica

Romero Celis Mely Ruiz Ruiz Karina Isabel Ruíz Sandoval Cristina Ruvalcaba Gámez Nora

Salazar Fernández Luis Fernando

Salgado Macedonio J. Félix Sánchez García Lizeth Sánchez Ramos Paloma Sánchez Vásquez Gustavo Sanmiguel Sánchez Imelda Saucedo Reyes Araceli Segura Vázquez Eugenio

Sheffield Padilla Francisco Ricardo

Silva Romo Luis Alfonso Sosa Ruíz Olga Patricia

Téllez Lilly

Toledo Zamora Karla Guadalupe Trasviña Waldenrath Jesús Lucía Valdez Martínez Lilia Margarita Valles Sampedro Lorenia Iveth Vargas Del Villar Enrique

Vázquez Robles Mario Humberto

Velasco Coello Manuel Viggiano Austria Carolina Yunes Márquez Miguel Ángel Zapata Bello Rolando Rodrigo

Zatarain García Susana